

PROPOSICIÓN ADITIVA

Adiciónese un **Artículo Nuevo** al Proyecto de Ley No. 143 de 2020 Cámara - 350 de 2020 Senado "*Por medio de la cual se adoptan medidas en materia de financiamiento para la reactivación del sector agropecuario, pesquero, acuícola, forestal y agroindustriales*", el cual quedará así:

Artículo Nuevo: Amplíase hasta el 30 de junio de 2021 el subsidio rural establecido en el artículo 9 del Decreto Legislativo 819 de 2020.

JUSTIFICACIÓN

Los efectos generados por la pandemia por el COVID-19, han tenido impactos sanitarios y también económicos sobre los ingresos de la población, derivados de las medidas de aislamiento obligatorio y social, el descenso en la actividad económica, la pérdida de empleos y de otras fuentes de ingreso formales o informales. Esta situación no ha sido ajena a los habitantes de la zona rural, y por ello, se observó una disminución en la capacidad de pago de los servicios que amenazó gravemente la sostenibilidad del servicio de acueducto provisto por organizaciones autorizadas en zonas rurales, muchas de las cuales no recibieron subsidios del municipio en la vigencia 2020.

Por ello, el Decreto Legislativo 819 del 4 de junio de 2020 "Por el cual se adoptan medidas para el sector de Vivienda, Ciudad y Territorio en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica ordenada mediante Decreto 637 del 6 de mayo de 2020", dentro de las medidas adoptadas, incluyó el subsidio rural en los siguientes términos:

Artículo 9. Subsidio Rural. El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio podrá otorgar un subsidio a la demanda para aquellas organizaciones autorizadas para prestar servicios de agua potable, vigilados por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios que atiendan a suscriptores en zona rural. El monto del subsidio será otorgado mensualmente a partir de la vigencia del presente Decreto y hasta el 31 de diciembre de 2020.

PARÁGRAFO 1. El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio establecerá mediante resolución las condiciones y requisitos para el otorgamiento de este subsidio y determinará su focalización y distribución, teniendo en cuenta la necesidad de priorizar organizaciones comunitarias sin ánimo de lucro que atiendan usuarios de menores ingresos.

PARÁGRAFO 2. Lo dispuesto en este artículo no aplica a las personas prestadoras del servicio de acueducto que reciban el giro directo establecido en el artículo 4 del Decreto Legislativo 528 de 2020.

PARÁGRAFO 3. Los recursos para financiar el subsidio rural que se crea en el presente artículo se podrán atender con cargo a los recursos del Fondo de Mitigación de Emergencias -FOME.

Con estas facultades, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio expidió la Resolución 363 del 15 de julio de 2020, que establece las condiciones, requisitos, focalización y distribución del subsidio rural. Esta resolución desarrolla lo dispuesto en el artículo 9 del Decreto Legislativo 819 de 2020, teniendo en cuenta las condiciones particulares de las zonas rurales, en cuanto a la identificación de suscriptores de menores ingresos a partir de la estratificación socioeconómica o en ausencia de la misma, acreditación de la calidad de prestador del servicio de acueducto bajo la forma de organización autorizada, trámite de las solicitudes recibidas y control y seguimiento de los subsidios otorgados, entre otros aspectos necesarios para asegurar la correcta asignación de estos recursos.

Esta medida del subsidio rural, se originó en la necesidad de mitigar el impacto económico de la crisis ocasionada por la pandemia COVID 19 en las familias campesinas de menores ingresos, que los han visto aún más reducidos, y simultáneamente, asegurar recursos financieros para que las organizaciones comunitarias que prestan el servicio de acueducto en zonas rurales puedan continuar prestando el servicio de manera eficiente, teniendo en cuenta que muchas de ellas cuentan con algún grado de formalización, pero no aún no reúnen los requisitos para solicitar subsidios a la tarifa a los municipios y distritos de su jurisdicción, y tampoco cuentan con los requisitos establecidos para acceder a recursos de crédito.

La medida del subsidio rural fue diseñada, según los estimativos de las siguientes fuentes de información:

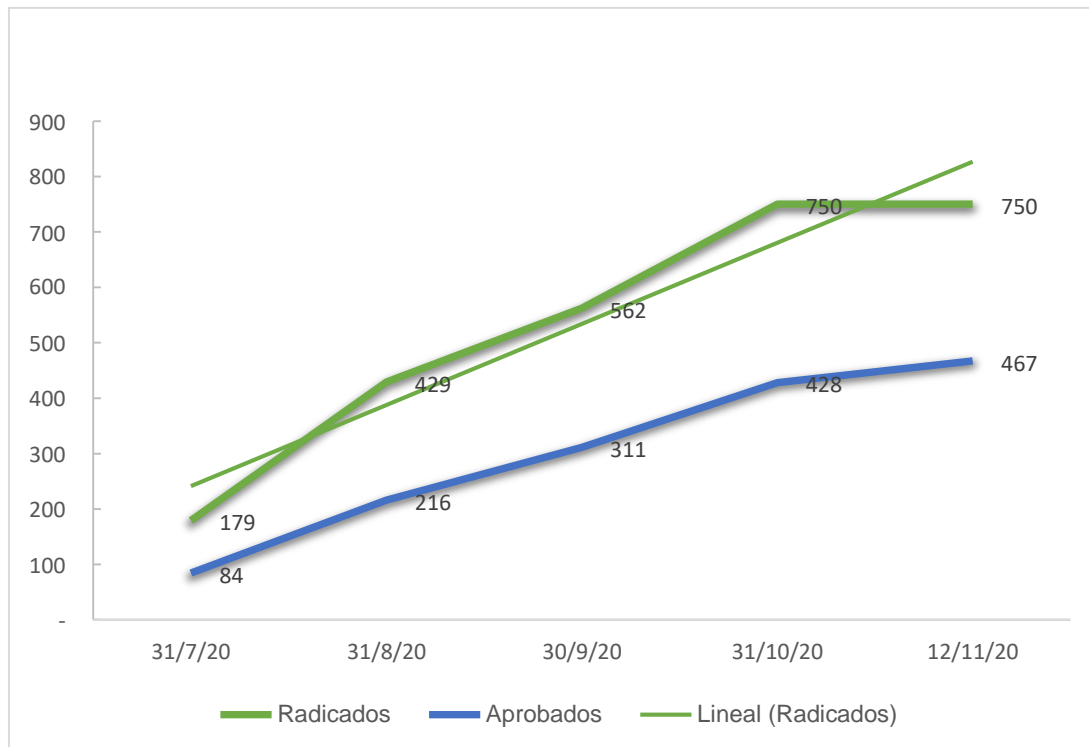
1. Registro Único de Prestadores de Servicios –RUPS, de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, el cual cuenta con 1.385 organizaciones autorizadas que reportan ser prestadores del servicio de acueducto en zona rural.

2. Sistema de Inversiones de Agua y Saneamiento Básico-SINAS del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, que cuenta con un inventario de comunidades y sistemas de agua y saneamiento básico rural y según lo reportado por las alcaldías municipales, informa sobre 2741 sistemas de suministro de agua en zonas rurales, administrados por organizaciones de naturaleza comunitaria, para los que adicionalmente se verificó que cuentan con infraestructura mínima para realizar tratamiento del agua.
3. Durante la ejecución del subsidio rural, se consultó la información de monitoreo a los recursos del Sistema General de Participaciones de Agua Potable y Saneamiento Básico (SGP APSB) correspondiente a la vigencia 2019, identificando que 174 organizaciones autorizadas recibían subsidios por parte de la entidad territorial con cargo a dicha fuente, por lo cual, no podrían ser beneficiarias del subsidio rural.

Así, se establece un número de 1211 organizaciones autorizadas que potencialmente pueden solicitar el subsidio rural, sin contar a aquellas que no se encontraban registradas ante la SSPD antes de junio de 2020.

Conforme a la vigencia de la medida de Subsidio Rural, con corte a la última fecha de recepción de solicitudes (octubre 20 de 2020), el MVCT recibió 750 solicitudes radicadas, de las cuales 467 se encuentran aprobadas y 271 fueron rechazadas por no cumplir con los requisitos establecidos. A continuación, la gráfica No. 1 muestra el comportamiento histórico de estas solicitudes.

Gráfica 1. Solicitudes radicadas vs. Solicitudes aprobadas



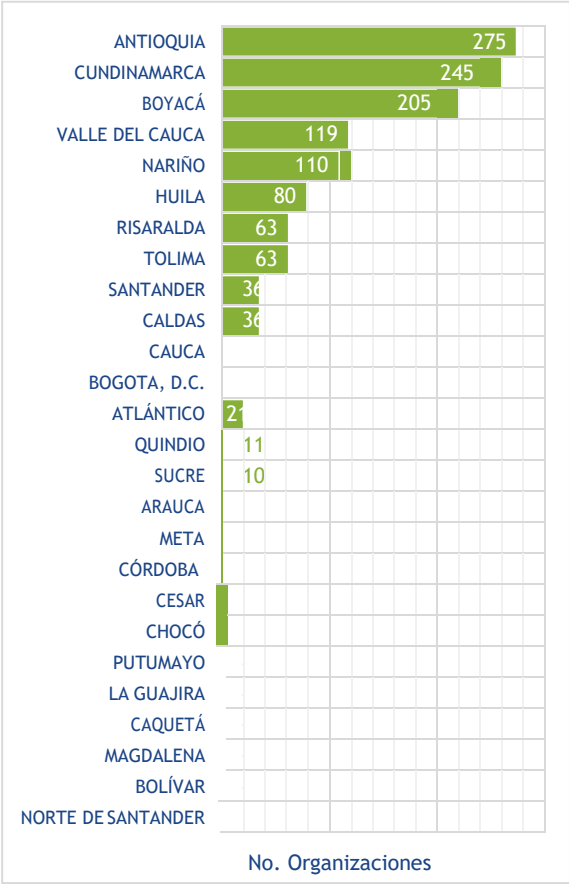
Fuente: MVCT, Corte de información: Noviembre 12 de 2020

Verificados todos los requisitos de las mismas, los resultados de la medida de subsidio rural son 462 solicitudes aprobadas presentadas por las organizaciones autorizadas prestadoras del servicio de acueducto que beneficiaron un total de 146.772 suscriptores equivalente a 587.088 personas.

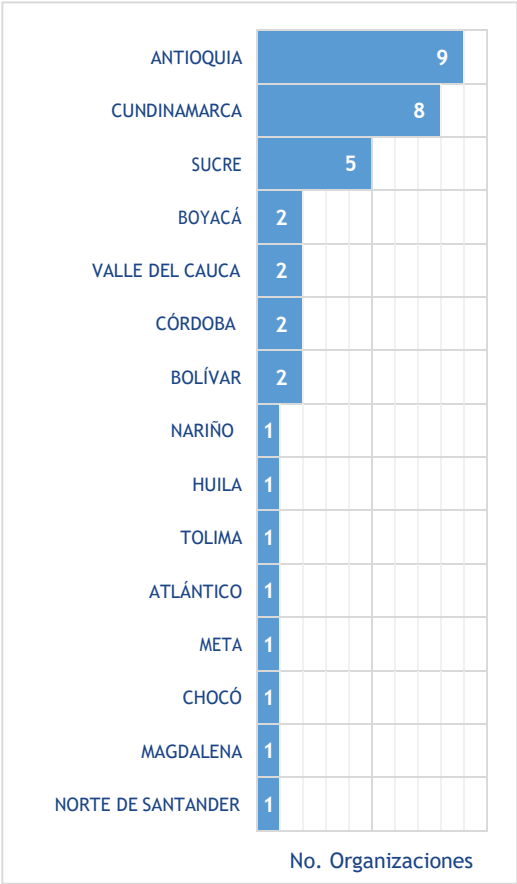
Según información suministrada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios -SSPD, a partir de la expedición del Decreto 819 de 2020 se presentó un incremento en las solicitudes de actualización e inscripción del Registro Único de Prestadores de Servicios – RUPS, por parte de las organizaciones autorizadas con un total de 274 trámites recibidos de los cuales fueron aprobados 115 (42% del total).

Así mismo, con base en las solicitudes de subsidios recibidas, se observan 38¹ nuevos registros efectivos en el RUPS, los cuales se encuentran ubicados en 15 departamentos del país (Antioquia, Cundinamarca, Sucre, Bolívar, Boyacá, Córdoba, Valle del Cauca, Atlántico, Chocó, Huila, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander y Tolima). Las siguientes gráficas muestran el número de prestadores inscritos en el RUPS (23/07/2020) y los nuevos registros inscritos en el RUPS, identificados por el MVCT, con corte al 30 de septiembre de 2020.

Gráfica 3. Número de Organizaciones inscritas RUPS
(23/07/2020)



Gráfica 4. Número de Organizaciones nuevas inscritas
en RUPS (30/09/2020)



Fuentes: SSPD, corte de información: 23 julio 2020

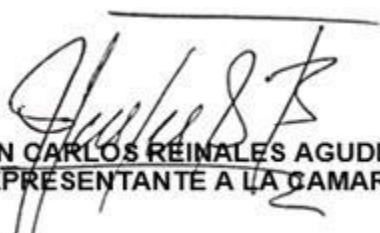
MVCT, corte de información: 30 septiembre 2020

En suma, la medida del subsidio rural ha demostrado ser efectiva en el cierre de brechas en acceso a agua potable en zonas rurales, por cuanto constituyó un verdadero alivio económico para las familias beneficiarias, y permitió asegurar la operación continua de los sistemas de acueducto gestionados por las mismas comunidades. En la implementación de la medida se hace evidente un impacto adicional, y es el incentivo a la formalización de las organizaciones autorizadas de naturaleza comunitaria en zona rural, puesto que las familias rurales, y las mismas juntas o asociaciones de usuarios que están a cargo de proveer los servicios, encontraron un mecanismo expedito para acceder a los recursos públicos por vía de los subsidios, por lo cual, se vieron motivados a renovar o actualizar su personería jurídica, actualizar la información reportada ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios lo que impulsó su formalización y además los recursos para contar con los insumos, herramientas para implementar optimizaciones del sistema de acueducto y operativas del servicio. Por otra parte, se generó un creciente interés de las entidades territoriales y de otras entidades públicas, privadas o de la sociedad civil para prestar asistencia técnica a estas organizaciones autorizadas. Con el subsidio rural, se superaron barreras para la comunicación entre las entidades del Estado y las comunidades rurales, y fue posible emplear medios virtuales en diferentes jornadas de

1

socialización y capacitación, con lo cual, ahora existe mayor acercamiento y un mejor conocimiento de las realidades de la prestación del servicio de acueducto en zona rural.

En este contexto, la continuidad del subsidio rural permite asegurar el acceso a agua potable en zonas rurales para familias de menores ingresos, a través de las organizaciones autorizadas que accedieron al subsidio rural, lo que puede alcanzar un mayor número en el primer semestre de 2021 contribuyendo a mitigar los efectos de la pandemia del COVID 19. Por otra parte, el subsidio rural permite llegar adecuadamente a estas organizaciones comunitarias, con el apoyo hoy, del Gobierno nacional, y luego, de las entidades territoriales, a través de asistencia técnica y de subsidios, lo que fortalece sus capacidades y las prepara para participar más activamente en la reactivación económica, con un direccionamiento claro hacia las necesidades de las zonas rurales.



JUAN CARLOS REINALES AGUDELO
REPRESENTANTE A LA CÁMARA

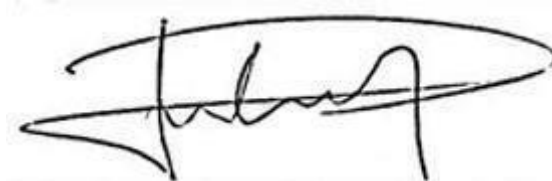


HORACIO JOSÉ SERPA
Horacio José Serpa Moncada

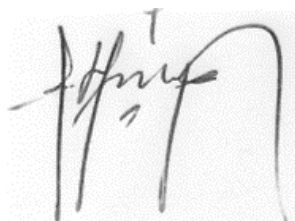
Senador de la República



Juan Diego Echavarría Sánchez
Representante a la Cámara



Julián Bedoya Pulgarín
Senador de la República



Henry Fernando Correal Herrera
Representante a la Cámara



Ana María Castañeda Gómez
Senadora de la República



Andrés David Calle Aguas
Representante a la Cámara

Representante a la Cámara

Carlos Andrés Trujillo González
Senador de la República



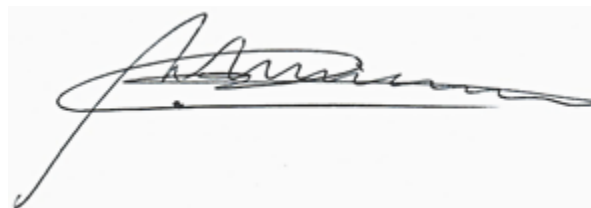
Faber Alberto Muñoz Cerón
Representante a la Cámara



Amanda Rocío González z
Senadora de la República



Jhon Arley Murillo Benítez
Representante a la Cámara



Antonio Luis Zabaraín Guevara
Senador de la República



Jorge Enrique Benedetti Martelo
Representante a la Cámara



Jairo Humberto Cristo Correa
Representante a la Cámara



María Cristina Soto de Gómez
Representante a la Cámara

A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized 'R' and 'C' that are interconnected, with a horizontal line extending to the right.

Jairo Reinaldo Cala Suárez.
Representante a la Cámara

PROPOSICIÓN ADITIVA

Adiciónese un **Artículo Nuevo** al Proyecto de Ley No. 143 de 2020 Cámara - 350 de 2020 Senado “*Por medio de la cual se adoptan medidas en materia de financiamiento para la reactivación del sector agropecuario, pesquero, acuícola, forestal y agroindustriales*”, el cual quedará así:

Artículo Nuevo: Adiciónese los parágrafos 4 y 5 al artículo 9 del Decreto Legislativo 819 de 2020, así:

PARÁGRAFO 4. Exclusivamente para los efectos del subsidio rural de que trata este artículo, los usuarios - de inmuebles no estratificados - para quienes se solicite el subsidio se entenderán transitoriamente incorporados al estrato 1.

PARAGRAFO 5. Las organizaciones autorizadas solicitantes del subsidio que no hayan fijado sus tarifas definidas por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico tendrán plazo para adoptarlas hasta el 31 de diciembre de 2021.

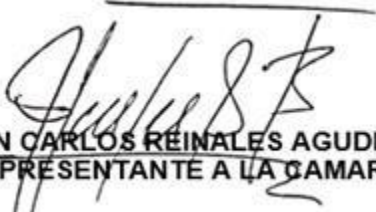
JUSTIFICACIÓN

Del párrafo 4. Se adiciona un párrafo 4 al artículo 9 del Decreto legislativo 819 de 2020, dado que la estratificación socioeconómica es un mecanismo útil para mejorar la focalización del subsidio rural, y se requiere que este apoyo económico permita enviar una señal clara de beneficio por estar en la condición de suscriptor o usuario de menores ingresos, aun cuando el predio conectado al servicio no cuente con estratificación, por las siguientes causas:

- a) La estratificación socioeconómica es el mecanismo que permite identificar a los suscriptores o usuarios de menores ingresos. La estratificación socioeconómica debe ser asignada a cada predio, por la administración municipal o distrital, como resultado de la aplicación de la metodología de estratificación establecida por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE, en virtud de la Ley 732 de 2002. Sin embargo, en las zonas rurales se ha evidenciado un importante rezago en la asignación inicial o la actualización de la estratificación socioeconómica por parte de las entidades territoriales, lo que impide una aplicación expedita del subsidio rural. Por ello la misma Ley 732 de 2002, en su artículo 6 párrafo establece que, en ausencia de estratificación, el prestador pueda atender en primera instancia la solicitud por cuyo cobro se reclama – sin embargo, la norma no establece lineamientos para que el prestador asigne el estrato, y no es adecuado imponer al prestador la carga de definir el estrato con la metodología establecida por el DANE, que conlleva estudios técnicos específicos. En consecuencia, la focalización del subsidio rural se realizó, entre el 04 de junio y el 31 de diciembre de 2020, identificando a todos los beneficiarios como “suscriptores de menores ingresos” sin hacer distinción por estrato, dado que el subsidio rural se estableció en un valor estándar para todos los beneficiarios.
- b) La estratificación socioeconómica permite establecer un tope para el otorgamiento de subsidios, de conformidad con el numeral 99.6 de la Ley 142 de 1994. (Ver artículo 125 Ley 1450 de 2011 “Para efectos de lo dispuesto en el numeral 6 del artículo 99 de la Ley 142 de 1994, para los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, los subsidios en ningún caso serán superiores al setenta por ciento (70%) del costo del suministro para el estrato 1, cuarenta por ciento (40%) para el estrato 2 y quince por ciento (15%) para el estrato 3. Sin embargo, como la identificación de los suscriptores de menores ingresos del artículo 9 del Decreto 819 de 2020 no tenía una asignación de estrato, no fue posible aplicarlo a la medida del subsidio rural, y por ello tampoco fue posible aplicar el porcentaje de subsidio máximo definido por la ley según el estrato correspondiente.
- c) La incorporación transitoria de los usuarios del estrato 1 para efectos de conceder los subsidios en zonas no estratificadas ya tiene un antecedente legal en el párrafo del artículo 99 de la Ley 142 de 1994, y en otras disposiciones legales que promueven un trato diferencial. La asignación del estrato 1 por defecto en ausencia de estratificación, permite aplicar la medida del subsidio rural de manera expedita y en condiciones de equidad., sin generar cargas adicionales al prestador de acueducto en zona rural. Por otra parte, se adecúa el subsidio rural a las condiciones normales de otorgamiento por las alcaldías municipales, sin incertidumbre sobre el estrato asignado, lo que tiene impactos en los procesos de facturación del servicio de acueducto, y en la proyección futura de los balances de subsidios y contribuciones que se requieren para solicitar el subsidio al respectivo municipio, a partir de la vigencia 2020

Del párrafo 5. De conformidad con el artículo 88 numeral 1 de la Ley 142 de 1994, Todas las personas prestadoras de los servicios públicos domiciliarios, tienen el deber de “...ceñirse a las fórmulas que defina periódicamente la respectiva comisión para fijar sus tarifas. De acuerdo con los estudios de costos, la comisión reguladora podrá establecer topes máximos y mínimos tarifarios, de obligatorio cumplimiento por parte de las empresas”. Así, la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, ha establecido un marco tarifario aplicable a quienes prestan el servicio de acueducto a menos de 5000 suscriptores, que aplica a las zonas rurales, en el cual se definen costos mínimos de referencia, administrativos y operativos. Sin embargo, dichos costos mínimos de referencia, aplicados a la facturación, se encuentran dentro de la capacidad de pago de los suscriptores o usuarios de menores ingresos, cuando estos reciben los subsidios.

Sin embargo, el subsidio rural del artículo 9 del Decreto Legislativo 819 de 2020, justamente debió ser definido como un subsidio especial, para poder llegar a las organizaciones autorizadas de naturaleza comunitaria que no reciben subsidios a la tarifa que otorgan las administraciones municipales. Esto, porque estos prestadores en zonas rurales enfrentan dificultades para reunir los requisitos de solicitud de los subsidios ante la entidad territorial, lo que a su vez les impide asegurar los ingresos para su adecuada operación y cumplimiento de las obligaciones administrativas, con lo cual, se perpetúan sus débiles capacidades administrativas para solicitar los subsidios en las siguientes vigencias. Como resultado, estas organizaciones autorizadas en su mayoría cobran tarifas que están por debajo de los costos mínimos de referencia establecidos por la regulación, y con ello, están omitiendo su deber legal (artículo 88.1 de la Ley 142 de 1994). Por ello, se requiere que las organizaciones autorizadas cuenten con la confianza necesaria para continuar recibiendo el subsidio rural durante el año 2021 sin ser sancionadas por la inobservancia del marco tarifario, y conceder una transición hasta el 31 de diciembre de 2021, para adecuar sus tarifas conforme a las disposiciones de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, sin que ello cause un impacto desfavorable a sus usuarios. De otra manera, la exigencia inmediata de la aplicación del marco tarifario podría resultar en un incremento súbito de las tarifas que venían cobrando las organizaciones, sin que estén asegurados los subsidios para las mismas por parte de la entidad territorial.



JUAN CARLOS REINALES AGUDELO
REPRESENTANTE A LA CÁMARA

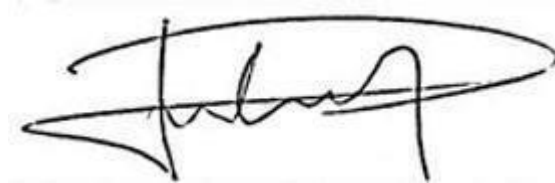


Horacio José Serpa Moncada

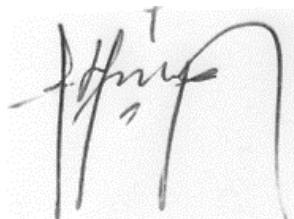
Senador de la República




Juan Diego Echavarría Sánchez
Representante a la Cámara



Julián Bedoya Pulgarín
Senador de la República



Henry Fernando Correal Herrera
Representante a la Cámara



Ana María Castañeda Gómez
Senadora de la República



Jairo Reinaldo Cala Suárez.
Representante a la Cámara



Carlos Andrés Trujillo González




Faber Alberto Muñoz Cerón
Representante a la Cámara

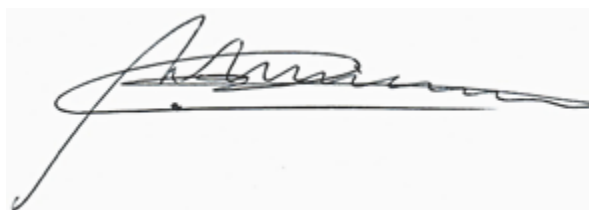


Senador de la República

Amanda Rocío González z
Senadora de la República



Jhon Arley Murillo Benítez
Representante a la Cámara



Antonio Luis Zabaraín Guevara
Senador de la República



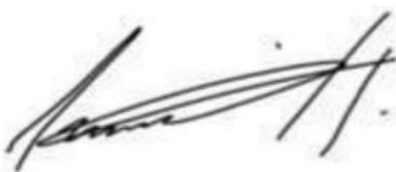
Jorge Enrique Benedetti Martelo
Representante a la Cámara

A stylized handwritten signature in black ink, featuring a large, looping 'C' and 'R'.

Jairo Humberto Cristo Correa
Representante a la Cámara

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'María Cristina Soto de Gómez'.

María Cristina Soto de Gómez
Representante a la Cámara

A handwritten signature in black ink, featuring a series of overlapping, sweeping strokes.

Andrés David Calle Aguas
Representante a la Cámara